

La otra orilla.

Cómo la exclusión crea su propia cultura, el sistema mira hacia otro lado y el miedo se convierte en negocio.

1. La paradoja de la exclusión.

La paradoja de la seguridad en España es tan evidente como desconcertante. Según el Global Peace Index 2025, España ocupa el puesto 25 entre 163 países, con una tasa de homicidios de 0,5 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de Europa. El 81% de los españoles afirma sentirse seguro caminando solo de noche, porcentaje superior al de Francia (73%) o Italia (60%), aunque por debajo de los países nórdicos. En términos comparativos, España es un país seguro.

Y, sin embargo, la percepción de inseguridad no deja de crecer. Más de la mitad de los españoles (53,33%) cree que el país es menos seguro que hace dos años. El 67% considera que la delincuencia ha aumentado y el 66% opina lo mismo sobre los delitos violentos. España es uno de los dos únicos países del mundo donde la preocupación por la seguridad ha crecido en el último año. La brecha entre la realidad estadística y la percepción ciudadana es evidente. Pero esa brecha no es fruto de la irracionalidad o del alarmismo mediático, es el resultado de una realidad más compleja que los datos agregados no reflejan.

Los datos oficiales tienen limitaciones. La criminalidad registrada depende en gran medida de las denuncias. Muchos delitos, especialmente los hurtos menores, los robos en viviendas no denunciados o las agresiones que no se comunican, no aparecen en las estadísticas. La cifra negra de la delincuencia, como la llaman los criminólogos, es un problema real. No sabemos cuántos delitos no se denuncian, pero son muchos. Y el ciudadano que sufre un robo en su vivienda y no denuncia por desconfianza en el sistema está alimentando una realidad paralela que no aparece en los informes oficiales.

La criminalidad no es homogénea. Los datos agregados ocultan realidades locales muy distintas. En 2025, mientras la criminalidad descendía en Madrid y Cataluña, crecía en Castilla y León y otras comunidades. La seguridad no se distribuye de forma uniforme. Hay pueblos y barrios donde la delincuencia es una experiencia cotidiana y otros donde apenas existe. El ciudadano que vive en una zona conflictiva no se siente representado por una media nacional que le dice que el país es seguro.

Los robos en viviendas son un caso particular. Aunque las cifras agregadas puedan mostrar fluctuaciones, las empresas de seguridad señalan que el robo en viviendas es uno de los delitos que más ha aumentado en los últimos meses. En España se produce un robo en vivienda aproximadamente cada quince minutos. Y cada uno de ellos genera miedo, desconfianza y una percepción de inseguridad que ninguna estadística nacional puede contrarrestar. Además, aunque algunos delitos hayan disminuido, se han vuelto más sofisticados (uso de ganzúas profesionales, inhibidores de frecuencia, técnicas de *bumping* para abrir cerraduras), lo que genera una sensación de mayor vulnerabilidad.

La percepción de inseguridad también se alimenta de la experiencia cotidiana. El que ve cómo su vecino ha sido víctima de un robo, el que encuentra la puerta de su casa forzada al volver del trabajo, el que sabe que en su barrio el tráfico de drogas es una realidad palpable, no necesita estadísticas para sentirse inseguro. Su miedo es real y está justificado. Y ese miedo es el combustible que alimenta la inseguridad y el negocio que se construye a partir de ella.

En este contexto, existe un problema que agrava la situación. Hay territorios donde la ley no entra y comunidades que viven al margen del sistema, generando una sensación de impunidad y abandono que afecta a la convivencia. ¿Cómo es posible que toleremos la existencia de zonas donde la policía no entra? ¿Por qué quienes viven en ellas han desarrollado una cultura propia que justifica su marginación? ¿Y qué ocurre con el ciudadano corriente, atrapado entre el miedo y la desconfianza hacia unas instituciones que no le protegen?

El miedo no es abstracto. Es miedo a que entren en tu casa mientras duermes, a que te roben el coche cuando aparcas en la calle, a que tus hijos no puedan volver solos a casa, a que la policía no pueda hacer nada porque "no tiene pruebas suficientes" o "no tiene orden judicial". Y ese miedo, legítimo y real, es el combustible que alimenta el negocio de la inseguridad.

2. La geografía de la marginación.

La exclusión no es un fenómeno abstracto. Tiene nombre, tiene dirección y tiene historia. La Cañada Real en Madrid, las 3.000 Viviendas en Sevilla, el Puche en Almería, la Mina en Sant Adrià de Besòs, el Raval en Barcelona, el Distrito Sur en Córdoba, Carabanchel en Madrid... Estos barrios y otros como ellos son el testimonio vivo de un fracaso estructural.

Son espacios donde la pobreza no es una excepción y donde la desesperanza se transmite de generación en generación. La concentración de la pobreza en estos territorios no es un accidente, es el resultado de décadas de políticas de vivienda que han confinado a la población más vulnerable en los márgenes de las ciudades, lejos de los servicios, de las oportunidades y de la mirada de quienes podrían cambiar su situación. En estos barrios la falta de recursos económicos es uno de los principales factores que favorecen la criminalidad. La combinación de desempleo, violencia y tráfico de drogas amenaza el futuro de quienes viven allí. Algunas de estas zonas son ya consideradas como "No-Go Zones", zonas donde la policía tiene serias dificultades para actuar y donde impera su propia ley. Son territorios controlados por los clanes y mafias que los habitan.

El caso de la **Comunidad Valenciana** es especialmente revelador. La criminalidad creció un 3,3% en 2025 respecto al año anterior, con un total de 292.745 infracciones penales en el conjunto del territorio autonómico. La cifra total de infracciones penales en la Comunidad Valenciana durante 2025 fue de 283.414, una tasa de 54,3 por cada 1.000 habitantes, lo que la sitúa como la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa de criminalidad de España. La cibercriminalidad ha crecido un 18,01%, pasando de 46.707 infracciones en 2024 a 55.181 en 2025.

Pero la media autonómica oculta diferencias muy marcadas entre provincias:

- **Provincia de Alicante:** la criminalidad convencional subió un 5,2%, pasando de 86.722 a 91.257 infracciones. Alicante se ha consolidado como la provincia con mayor incidencia de robos con fuerza en domicilios de toda la Comunidad Valenciana. Solo en la primera mitad de 2025, la provincia registró un aumento del 8% en los robos con fuerza. Los robos con violencia e intimidación han llegado a registrar picos de subida superiores al 50%. La capital, Alicante, alcanzó 27.169 infracciones, un 10,7% más que en 2024. En términos absolutos, la ciudad registró 20.849 infracciones penales en 2025, con un aumento del 12,6%. La cibercriminalidad creció un 11,7% en la provincia.
- **Provincia de Valencia:** la criminalidad convencional bajó un 2,3%, de 125.524 a 122.634 infracciones. En la ciudad de Valencia, el descenso fue del 3% en 2025. Los robos con fuerza en domicilios descendieron un 14,7% en la provincia. Sin embargo, los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 5,1% y las agresiones sexuales con penetración un 15,2%. La cibercriminalidad creció un 20,7% en Valencia.
- **Provincia de Castellón:** la criminalidad convencional descendió un 3,2%, de 24.461 a 23.673 infracciones. La cibercriminalidad experimentó el mayor crecimiento de las tres provincias, con un 30,7%.

El detalle municipal revela diferencias aún más acusadas. Entre los municipios de más de 20.000 habitantes, diez destacan por registrar incrementos muy superiores a la media autonómica:

- **Novelda** (Alicante) encabeza la lista con un aumento del 29,4%, alcanzando 1.020 infracciones penales.
- **Crevillent** (Alicante) registró 1.272 delitos, un 20,1% más.
- **Ibi** (Alicante) sumó 980 infracciones, un 19,8% más.
- **La Vall d'Uixó** (Castellón) alcanzó 1.390 infracciones, un 17,9% más.
- **Villena** (Alicante) registró 1.396 delitos, un 16,4% más.
- **Alaquàs** (Valencia) y **Carcaixent** (Valencia) comparten una subida del 15,8%, con 1.039 y 1.190 infracciones respectivamente.
- **Païporta** (Valencia) registró 1.064 delitos, un 15,2% más.

- **Algemesí** (Valencia) alcanzó 1.612 infracciones, también con un 15,2% de aumento.
- **El Campello** (Alicante) sumó 1.488 infracciones, un 14,8% más.

Pero el problema no se limita a los grandes municipios. Pueblos de tamaño medio, como L'Alcúdia (Valencia), de unos 12.000 habitantes en la comarca de la Ribera Alta, han experimentado incrementos aún más alarmantes. En el primer trimestre de 2026, la criminalidad en L'Alcúdia aumentó un 28,8% en comparación con el mismo período del año anterior, con un total de 246 infracciones penales. El propio Ayuntamiento ha notificado un aumento de robos menores y actos vandálicos en la localidad, y en 2024 se activó un dispositivo especial de vigilancia para prevenir robos. El incremento del 28,8% en un solo trimestre es un dato que ninguna media autonómica puede ocultar.

Estos datos reflejan una realidad que el ciudadano corriente conoce bien: la inseguridad no se distribuye de forma homogénea. Hay pueblos y barrios donde la delincuencia es una experiencia cotidiana y otros donde apenas existe. El ciudadano que vive en una zona conflictiva no se siente representado por una media nacional o autonómica que le dice que el país es seguro.

3. La historia del pueblo gitano. 600 años de exclusión.

La historia del pueblo gitano en España es, ante todo, una historia de persecución y resistencia. Su presencia está documentada desde 1425. Durante siglos, se les prohibió desempeñar oficios, se les persiguió por su forma de vida y se les sometió a leyes discriminatorias que los excluían de la vida social.

Esta historia de persecución no es un pasado remoto. Es la memoria viva que se transmite de generación en generación y que explica, en buena medida, la desconfianza hacia las instituciones y la resistencia a la integración en una cultura que durante siglos ha considerado a los gitanos como una raza inferior. Como señalaba un dirigente gitano en 1979, la escasa presencia de asalariados entre la comunidad gitana responde al "sentimiento de no querer estar subordinados y sentirse libres".

El miedo a perder la identidad es otro factor clave. Para muchos gitanos, la integración no es solo un desafío económico o social, es una amenaza cultural. Integrarse puede percibirse como renunciar a lo que se es, a la comunidad y a la historia compartida.

La cultura gitana, forjada en la adversidad y la resistencia, es también un refugio. Perderla sería perder el único territorio que les ha pertenecido siempre.

4. Otras minorías: inmigrantes, musulmanes y la geografía de la exclusión.

El fenómeno de la marginación no afecta solo a la comunidad gitana. La inmigración ha traído consigo nuevas minorías que, en muchos casos, se han asentado en los mismos barrios degradados.

Los inmigrantes no europeos se concentran en las zonas urbanas y en los barrios más degradados, donde las viviendas tienen peores condiciones habitacionales. Casi la mitad de las personas migrantes no europeas vive en los barrios con las rentas más bajas.

La comunidad musulmana en España, que supera los 2,4 millones de personas, también sufre procesos de marginación. La concentración de población de origen magrebí en barrios periféricos, la falta de oportunidades laborales y la discriminación en el acceso a la vivienda y al empleo crean un caldo de cultivo para la exclusión. En algunos barrios, como los que aparecen en los listados de zonas conflictivas, el 70% de la población es de origen magrebí.

Estas minorías comparten con la comunidad gitana un mismo destino: la concentración en los márgenes, la falta de oportunidades y la estigmatización social.

No son "culturas delincuentes", son poblaciones atrapadas en un círculo de exclusión del que el sistema no les ofrece salida. La verdadera "zona prohibida" no es el barrio, es la mente de quienes creen que el problema se soluciona con más policía y menos escuelas.

5. La cultura de la marginación como respuesta adaptativa.

Cuando una persona o un grupo es sistemáticamente excluido durante siglos, necesita construir una narrativa que dé sentido a su situación. La cultura de la marginación no es un defecto moral, es una respuesta adaptativa. No es que estas minorías "quieran" vivir al margen, es que han aprendido a sobrevivir al margen porque el centro les ha dado la espalda.

Desde dentro, esa cultura tiene su propia lógica: códigos de honor, lealtad al grupo y desconfianza hacia el exterior. Lo que desde fuera se percibe como "delincuencia", desde dentro puede percibirse como "supervivencia" o incluso como "justicia".

La cultura mayoritaria es percibida como hipócrita porque promete igualdad y oportunidades, pero en la práctica excluye y margina. La rebeldía no es solo contra el sistema, sino contra la falsedad que se percibe en él.

Esta dinámica no es exclusiva del pueblo gitano. Otros grupos que han sufrido procesos similares de exclusión (ciertas comunidades de inmigrantes y poblaciones marginales que han desarrollado sus propios códigos) presentan patrones comparables: una cultura de resistencia que se construye como defensa frente a un sistema que les ha negado un lugar.

6. El miedo como experiencia cotidiana.

La brecha entre la delincuencia real y la percepción de inseguridad es significativa. El miedo crece influido por los medios de comunicación y las redes sociales, que amplifican la sensación de peligro más allá de la realidad estadística.

Aproximadamente un 22% de los españoles afirma sentirse "poco seguro" al caminar solo por determinadas zonas durante la noche. El miedo al delito obliga a las personas a cambiar sus estilos de vida, a refugiarse en sus hogares y a evitar ciertos espacios.

La experiencia cotidiana del ciudadano corriente es la de la vulnerabilidad. Cada quince minutos se produce un robo en una vivienda en España. Las pérdidas económicas medias por robo superan los 2.000 euros por hogar. El 70% de los robos en viviendas se producen en pisos o apartamentos. Y solo un 10% de los objetos robados se recuperan.

El ciudadano que denuncia un robo sabe que el proceso durará meses o años. Sabe que el delincuente probablemente no será condenado. Sabe que, incluso si lo es, la pena será leve. Y esa certeza de impunidad no solo desanima a las víctimas, sino que también alimenta la sensación de que el sistema no funciona.

El ciudadano corriente no distingue entre delincuencia estructural y delincuencia ocasional. Solo sabe que tiene miedo y ese miedo no es irracional. En muchos casos, es la respuesta lógica a una situación que el sistema no ha sabido resolver. La percepción de inseguridad es un filtro a través del cual se interpreta la realidad. Un barrio conflictivo se transforma en un barrio peligroso. Un grupo de jóvenes en la calle se convierte en una amenaza. La complejidad de los problemas sociales se reduce a una ecuación simplista: ellos son el problema, nosotros las víctimas.

7. Quién se beneficia de la inseguridad. El negocio del miedo.

La inseguridad no es solo un problema social, es un negocio que mueve miles de millones de euros y que tiene un interés claro en que el miedo no desaparezca.

El sector de la seguridad privada en España facturó 6.440 millones de euros en 2024, un 7,6% más que el año anterior. España es el primer país de Europa y el cuarto del mundo en alarmas instaladas. Empresas como Securitas Direct, Movistar Prosegur Alarmas y ADT han construido su modelo de negocio sobre la base de vender seguridad a ciudadanos que sienten que el Estado no les protege. Cuanto más miedo hay, más alarmas se venden. Cuanta más inseguridad se percibe, más crece el negocio de la seguridad privada.

Y no solo la seguridad privada. Los medios de comunicación venden audiencia a través del miedo. Los partidos políticos utilizan la inseguridad como arma electoral. Las aseguradoras cobran primas más altas en zonas consideradas peligrosas. Todo el sistema tiene un interés en que el miedo persista. La inseguridad no es un problema, es la solución a los problemas de audiencia, de votos y de beneficios de unos pocos.

8. La trampa de la tolerancia y la burocracia como coartada.

La inacción de las autoridades no es solo falta de voluntad, es también el resultado de una burocracia que paraliza. La Justicia española funciona mal: faltan jueces, los procesos son muy lentos y hay demasiados asuntos pendientes enterrados en una burocracia que ninguna reforma legal ha conseguido agilizar.

El resultado es que el ciudadano que denuncia un robo sabe que el proceso durará meses o años, que el delincuente probablemente no será condenado y que, incluso si lo es, la pena será leve. Y esa certeza de impunidad no solo desanima a las víctimas, también alimenta la sensación de que el sistema no funciona.

Los agentes policiales se ven atrapados en esta burocracia. No pueden actuar sin una orden judicial y la orden judicial tarda en llegar. Las zonas donde la ley no entra no son solo un problema de voluntad política, son también un problema de incapacidad operativa. El sistema no es que no quiera actuar, es que, a menudo, no puede. La burocracia judicial se convierte así en una coartada perfecta. La inacción se justifica en la ley, pero la ley no es más que el escudo de una voluntad política ausente.

9. Las víctimas olvidadas.

En el debate sobre la inseguridad, hay un grupo que rara vez es mencionado: los residentes de estos barrios que viven atrapados entre la delincuencia y el abandono institucional. Gente honrada, trabajadora, que quiere vivir en paz y que, sin embargo, convive cada día con el miedo, la precariedad y la falta de oportunidades.

Ellos son víctimas de esta situación. Sufren la delincuencia en primera persona, el estigma de vivir en un barrio conflictivo, la indiferencia de unas administraciones que han dado la espalda a sus problemas y, a menudo, la desconfianza de una sociedad que los etiqueta sin conocerlos.

Dar voz a su sufrimiento es clave para huir del simplismo y para recordar que, detrás de los titulares sobre inseguridad, hay personas reales que merecen algo mejor que la resignación y el olvido.

10. Romper el círculo.

La solución probablemente no pasa por más policía o por estigmatizar a ciertos colectivos, sino por invertir en educación, empleo, vivienda y servicios sociales en los barrios que habitan. Pasa por reconocer que la exclusión no es un destino, sino el resultado de decisiones políticas que han abandonado a comunidades enteras.

Requiere entender la cultura de la marginación no como un defecto moral, sino como una respuesta a siglos de persecución y exclusión. La historia del pueblo gitano en España es la historia de una comunidad que ha sobrevivido a pesar de todo y esa historia merece ser entendida.

Mientras no se ataque la raíz del problema (la exclusión, la pobreza y la falta de oportunidades), el círculo se perpetuará. Y mientras la cultura de la marginación siga siendo la única forma de dar sentido a una vida sin horizontes, la delincuencia no desaparecerá.

El miedo es un sentimiento legítimo, pero convertirlo en un negocio, en un arma política o en una excusa para el abandono, es una elección. Y como toda elección, puede ser revertida. El primer paso con ese objetivo es dejar de mirar hacia otro lado y empezar a preguntarse por qué, después de 600 años, seguimos hablando de los mismos problemas.